

2004

El plan republicano en la facultad de derecho de Madrid (1931-1934)

Puyol Montero, José María

Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad

<http://hdl.handle.net/10016/1044>

Descargado de e-Archivo, repositorio institucional de la Universidad Carlos III de Madrid

EL PLAN REPUBLICANO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE MADRID (1931-1934)*

Sumario: 1. La proclamación de la II República y el plan provisional de Derecho.—2. Las asignaturas prácticas.—3. La división de la cátedra de Derecho internacional público y privado.—4. El impulso de los estudios de Economía.—5. Los estudios especiales de Administración en la Facultad de Derecho.—6. El examen de ingreso en la Universidad.—7. Epílogo: el estallido de la Guerra Civil.—Apéndice.

1. *La proclamación de la II República y el plan provisional de Derecho*

La caída de la Monarquía y el establecimiento de la II República tuvieron inmediatas consecuencias en la política universitaria. No pasó un mes desde la proclamación del nuevo régimen cuando el Gobierno provisional aprobó un decreto¹ el 13 de mayo de 1931, por el que quedaban derogados los planes vigentes de segunda enseñanza y de enseñanza universitaria aprobados durante la Dictadu-

* Este trabajo fue presentado en el homenaje a Mariano Peset celebrado en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III, en septiembre de 2003. La mayoría de las intervenciones fueron publicadas en: Adela Mora (ed.), *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, Madrid, 2004.

¹ Dice el decreto de 13 de mayo de 1931: «[...] Artículo 1.º Quedan derogados, con sus disposiciones complementarias, los planes vigentes de segunda enseñanza y de enseñanza universitaria; Artículo 2.º Queda restablecida para el próximo curso la legalidad anterior a la Dictadura; Artículo 3.º El Consejo de Instrucción Pública propondrá urgentemente la fórmula de adaptación que ha de regir hasta ser aprobado por las Cortes constituyentes el plan definitivo». Este decreto fue aprobado y ratificado por las Cortes Constituyentes por Ley de 4 de noviembre de 1931. *Colección Legislativa de Instrucción Pública*, año 1931, p. 681.

ra y se restablecía para el curso siguiente la legalidad anterior al 13 de septiembre de 1923².

El objeto de estas páginas es precisamente el análisis de la implantación del nuevo plan republicano en la facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. La fuente principal son las actas de la Junta de Facultad. Junto a ellas he podido utilizar otras fuentes documentales, entre las que se encuentran algunos expedientes del Archivo Histórico de la Universidad y de los archivos de varias facultades, las diversas revistas y publicaciones periódicas de la facultad de Derecho y de la Universidad en este periodo, las memorias-estadísticas y los discursos de apertura del curso académico. En cuanto a la bibliografía utilizada, he prestado atención a la información proveniente de algunos artículos y trabajos que ya han estudiado algunas facetas de la Universidad de Madrid en aquel periodo³.

Las fechas analizadas vienen marcadas por las actas conservadas de la Junta de Facultad. Ha llegado hasta nosotros íntegro el tomo correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 1923 y la del 8 de mayo de 1934. Por tanto, estas actas abarcan las sesiones de aquella Junta desde el curso 1923-1924 hasta el 1933-1934⁴.

La naciente República se proponía revisar y llevar por otro rumbo la enseñanza universitaria, frente a la política llevada a cabo en la época de la Dictadura⁵. El citado decreto de 13 de mayo de

² El 13 de septiembre de 1923 es la fecha de instauración de la Dictadura de Primo de Rivera.

³ Entre otros, los trabajos de M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)*, Valencia, Universitat de Valencia, 1984; M. Martínez Neira, *El estudio del Derecho. Libros de texto y planes de estudio en la Universidad contemporánea*, Madrid, Universidad Carlos III/Editorial Dykinson, 2001; A. Molero Pintado, *La reforma educativa en la II República*, primer bienio, Madrid, 1977; o C. Petit, «La administración y el Doctorado: centralidad de Madrid», *AHDE*, LXVII (1977), vol. I, pp. 593 a 613.

⁴ Las actas anteriores y posteriores por el momento se dan por desaparecidas, pérdida que se atribuye a los destrozos de los combates en la Ciudad Universitaria durante la Guerra Civil. Las que aquí utilizamos han permanecido bastante desconocidas hasta la fecha y son prácticamente inéditas. C. Petit, en su trabajo «La Administración y el Doctorado: centralidad de Madrid», ya menciona haberlas utilizado.

⁵ «Durante el periodo que empezó en 13 de septiembre de 1923 y terminó el 14 de abril de 1931, la arbitrariedad dictatorial destacó,

1931 permitía al Consejo de Instrucción Pública proponer unos planes provisionales para cada carrera universitaria hasta que las Cortes Constituyentes aprobasen el plan definitivo⁶. Estas medidas se concretaban en varias normas: el decreto de 11 de septiembre de 1931 y algunas órdenes posteriores, particularmente la del 16 de septiembre del mismo año.

Por el primero⁷ se establecía un plan de estudios provisional para la carrera de Derecho para el curso 1931-1932, que incluía un curso preparatorio y cinco cursos de licenciatura. El curso preparatorio lo habría de organizar la facultad o la sección de Filosofía y Letras, que podía, en caso necesario, utilizar los servicios del catedrático de Latín del Instituto y encargarle el desempeño de la cátedra de lengua latina. Este curso incluiría cinco asignaturas: *Introducción a la Filosofía* (tres horas semanales), *Lengua y Literatura españolas* (tres horas semanales), *Historia de España* (tres horas semanales), *Historia general de la cultura* (tres horas semanales) y *Lengua latina* (seis horas semanales).

El decreto señalaba seguidamente las asignaturas de la carrera de Derecho que tendrían de forma obligatoria todas las facultades de Derecho de España, que conformarían el plan de estudios vigente a partir del curso 1932-1933⁸:

sobre todo, en la obra del Ministerio de Instrucción Pública. Se hizo cuanto no debía hacerse, y de la que era urgente hacer no se hizo nada. En la segunda enseñanza y en la enseñanza universitaria la actividad desahogada llegó a límites de confusión y perturbación que importa corregir radicalmente. [...] Acordar a fin de curso la nulidad de todo lo preceptuado sobre segunda enseñanza y enseñanza universitaria, habría contribuido a aumentar la confusión y perturbación que la Dictadura produjo en la vida académica: permitir que se iniciase el nuevo curso dentro de las normas dictatoriales sería aceptar la complicidad con la perturbación y confusión...». Exposición de motivos del Decreto de 13 de mayo de 1931, *Colección Legislativa de Instrucción Pública*, año 1931, pp. 158 y 159; también aparece publicada la Exposición de motivos en el *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, 1931, pp. 291 y 292.

⁶ Cfr. artículo 3.º del decreto de 13 de mayo de 1931.

⁷ *Gaceta* de 12 de septiembre de 1931.

⁸ *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, julio de 1931, pp. 403 y 404; y *Anuario de la Universidad de Madrid, índice de las enseñanzas para el curso de 1932-33*, pp. 203 y 204.

CURSO	ASIGNATURAS
1.º	Derecho romano (6 horas semanales) Economía política (3 horas) Historia del derecho (6 horas)
2.º	Derecho político (6 horas semanales) Derecho canónico (6 horas) Derecho civil. Parte general (6 horas)
3.º	Derecho civil. Tratados especiales I (6 horas semanales) Derecho administrativo (6 horas) Derecho penal (6 horas)
4.º	Derecho civil. Tratados especiales II (6 horas semanales) Derecho internacional público (6 horas) Derecho procesal I (3 horas) Hacienda pública (3 horas)
5.º	Derecho mercantil (6 horas semanales) Derecho internacional privado (3 horas) Derecho procesal II (3 horas) Filosofía del derecho (3 horas)

Varias órdenes sucesivas aclaraban o rectificaban algunos de los puntos contenidos en el decreto provisional de 13 de mayo. La primera llevaba fecha de 16 de septiembre. En ella se autorizaba a las Juntas de Facultad para que, dentro de las normas generales establecidas en los respectivos planes de estudio, pudieran resolver las incidencias resultantes de la aplicación de dichos planes. También autorizaba esta orden a los bachilleres universitarios que desearan seguir los estudios de la facultad de Derecho, que pudieran optar entre cursar el preparatorio establecido en el plan provisional para el curso 1931-1932, o bien las asignaturas de la facultad de Filosofía y Letras y los idiomas que estaba previsto estudiar en el plan de 1928. Finalmente afirmaba que «aunque el plan de estudios comprende siete años, los alumnos oficiales podrán cursar la carrera en un tiempo mínimo de seis, para lo cual podrán matricularse, en el transcurso de ella, en asignaturas de los cursos inmediatos, siempre que el horario de enseñanzas teóricas y prácticas no presente incompatibilidad y se respete el orden de prelación que la Facultad fije»⁹.

⁹ «El Ministerio de Instrucción Pública ha dispuesto: 1.º Que como aclaración a los decretos de adaptación de estudios de las cinco Faculta-

Una orden de 24 de septiembre¹⁰ aclaró el párrafo 2.º de la anterior orden de 16 del mismo mes. Señaló que la aprobación de los estudios del curso preparatorio sería siempre previa a los estudios propios de la facultad, como requisito *sine qua non* para ingresar en la facultad de Derecho. Esta medida es rectificadora apenas dos semanas después, por una nueva orden de 7 de octubre, ante la avalancha de quejas de alumnos que solicitaban, como estaba dispuesto anteriormente, poder simultanear durante la carrera las asignaturas del curso preparatorio del plan vigente para Derecho. La nueva orden deroga lo dispuesto por orden de 24 de septiembre y autoriza cursar estas asignaturas «de una manera simultánea y verificar matrícula de las mismas en cualquiera de los cinco cursos que comprende el mencionado plan»¹¹.

Hubo varias órdenes complementarias más: la de 1 de octubre de 1931, que establece que el que hubiera aprobado la asignatura de *Derecho natural* quedaba exento de matricularse y examinarse de

des universitarias y teniendo en cuenta que su espíritu ha sido el de dar una pauta general para esta adaptación, permitiendo al mismo tiempo que se atiende a la variedad de circunstancias creadas por el régimen de autonomía en el establecimiento de sus planes de estudio de que venían gozando las universidades, y cuyas circunstancias habrán de tenerse en cuenta en cada caso, se autoriza a las respectivas Juntas de facultades para que, dentro de las normas generales establecidas en los indicados planes de estudio, puedan resolver las incidencias resultantes de la aplicación de aquellos planes. —2.º Se autoriza a los bachilleres universitarios que deseen seguir los estudios de la facultad de derecho, para optar entre cursar el preparatorio establecido en el plan provisional de 1931 a 32, o las asignaturas de la facultad de Filosofía y Letras y los idiomas que venían obligados a estudiar según el plan de 1928. —3.º Aunque el plan de estudios comprende siete años, los alumnos oficiales podrán cursar la carrera en un tiempo mínimo de seis, para lo cual podrán matricularse, en el transcurso de ella, en asignaturas de los cursos inmediatos, siempre que el horario de enseñanzas teóricas y prácticas no presente incompatibilidad, y se respete el orden de prelación que la Facultad fije». Orden de 16 de septiembre de 1931, *Colección Legislativa de Instrucción Pública*, año 1931, pp. 532 y 533; también en *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, julio de 1931, pp. 439 y 440.

¹⁰ Gaceta del 26 de septiembre de 1931, p. 2035.

¹¹ Orden de 7 de octubre de 1931 (*Gaceta* de 8 de octubre de 1931, p. 150).

Filosofía del Derecho; y la orden ministerial de 18 de octubre de 1931 sobre el preparatorio de Derecho. Ésta dispone que continúe el derecho de opción concedido a los bachilleres universitarios en cualquiera de sus dos secciones, cuando deseen seguir sus estudios de la facultad de Derecho. Este derecho les permitía elegir entre cursar el preparatorio establecido en el plan provisional o bien las asignaturas de la facultad de Filosofía y Letras; y los idiomas que venían obligados a estudiar, según el plan de 1928. De esta manera podían simultanear y realizar la matrícula de dichas enseñanzas en cualquiera de los cursos de los estudios de la facultad de Derecho¹².

¿Cuáles son las novedades principales del nuevo plan de Derecho de la II República? Es un plan rígido, con todas las asignaturas obligatorias, en el que a diferencia del plan vigente antes de septiembre de 1923, las universidades no podrán añadir asignaturas propias en uso de su autonomía. El plan además es uniforme para toda España, sin que las facultades estén posibilitadas para añadir ninguna asignatura propia. Tampoco los estudiantes podrán inicialmente configurar su propio *currículum* de estudios, aunque más adelante se rectificará esto en lo referente a las asignaturas optativas del preparatorio.

El plan incluye también en su descripción, con carácter preceptivo y general, el número de horas lectivas semanales que se asigna a la docencia de cada una de las disciplinas, por lo que nuevamente pierde cada facultad las competencias específicas que solían atribuírsele para organizar sus propias enseñanzas. El número de horas lectivas quedan así en quince en los cursos primero, segundo y quinto, y dieciocho en tercero y cuarto. Y el número de asignaturas serán tres en 1.º, 2.º y 3.º; y cuatro en los cursos 4.º y 5.º de carrera, es decir, diecisiete en total.

Por otro lado, se vuelve a un curso preparatorio rígido y previo a los estudios en la carrera de Derecho, aunque, como hemos visto, desaparecerá pronto este curso previo organizado por la facultad de Filosofía y Letras y sus asignaturas podrán también cursarse a lo largo de la carrera.

En cuanto a las asignaturas de la Licenciatura, se suprime en el primer curso la de *Derecho natural* y su hueco lo cubre la de *Eco-*

¹² Orden ministerial de 18 de octubre de 1931 sobre el preparatorio de Derecho, *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, octubre de 1931, p. 522.

nomía política. De esta manera tanto el primer curso como el segundo se quedan con tres asignaturas. El tercer curso será igual al plan anterior, lo mismo que el cuarto. Y en el quinto se añade la asignatura de *Filosofía del Derecho*, que se puede considerar equivalente a la suprimida *Derecho natural*, o las antiguas *Teoría del Derecho* o *Introducción al Derecho*. Prueba de ello es que por una orden de 1 de octubre se puede convalidar *Filosofía del Derecho* cuando se tiene *Derecho natural* aprobado¹³.

Otra novedad de este plan provisional es que se simplifican los nombres de las asignaturas. Así, por ejemplo, *Elementos de Derecho romano* pasa a denominarse *Derecho romano*, o *Procedimientos judiciales* se llamará ahora *Derecho procesal*. Esta nomenclatura —con un breve paréntesis en los últimos años de la II República— será la que pase a los planes de estudio de después de la Guerra Civil y la que se sigue utilizando habitualmente en los planes de estudio actuales.

¿Qué ocurre con los idiomas? De un lado, el decreto de 11 de septiembre de 1931 no menciona la exigencia de idiomas en el plan de Derecho. Ello significa que desaparece el estudio obligatorio de idiomas modernos en la carrera. En los meses siguientes sólo encontramos alguna disposición aislada sobre los institutos de idiomas en las facultades, como es el caso de la orden de 24 de agosto de 1932, que dispone que continúen subsistiendo estos Institutos, y concede a aquéllas una amplia autonomía para ordenar sus enseñanzas en este campo¹⁴.

¿Siguió vigente el plan de 13 de mayo de 1931 en los cursos siguientes o se introdujeron pronto nuevos retoques? No hemos de olvidar que el plan aprobado en mayo de 1931 era considerado provisional. En buena lógica, pronto debería plantearse su revisión. Si empezamos repasando el curso preparatorio, comprobamos que en el curso siguiente, 1932-1933, se vuelve a mencionar el que apareció en

¹³ Orden ministerial de 1 de octubre de 1931 sobre asignatura de Derecho natural. Dispone que «los alumnos que tengan cursada y aprobada la asignatura de Derecho natural, que figuraba en los planes anteriores de las Facultades de Derecho, queden dispensados de la matrícula y examen de la asignatura de Filosofía del Derecho, que forma parte del plan de estudios aprobado por decreto de 11 de septiembre último». *Boletín de la Universidad de Madrid*, año III, octubre de 1931, p. 522.

¹⁴ Orden ministerial de 24 de agosto de 1932.

el decreto de 13 de mayo, con la nota '*sólo es obligatorio cursar dos de las asignaturas que figuran en esta sección*'. Sabemos que este asunto fue estudiado más adelante en la Junta de Facultad de 8 de mayo de 1934. Se habló de la forma de aprobación de aquellas asignaturas en la facultad de Filosofía y Letras. En las actas se dice escuetamente que se acepta la fórmula propuesta y acordándose que el Sr. Decano se ponga de acuerdo con el de Filosofía y Letras en cuanto al detalle de su aplicación¹⁵. Comprobamos, por tanto, que las asignaturas del preparatorio continúan organizándose por la facultad de Filosofía y Letras y que los alumnos de Derecho asistían a aquella facultad para cursarlas.

En cuanto a las asignaturas de la Licenciatura, el plan provisional establecido al implantarse la II República va a seguir vigente en años sucesivos con mínimas variaciones¹⁶. Durante el curso 1933-1934, lo mismo que en el anterior, fue exactamente el previsto por el decreto de 11 de septiembre de 1931. Sólo en el 1934-35, aunque las asignaturas son básicamente las mismas, dos de ellas retoman su antiguo nombre: *Derecho romano* recupera su primitivo nombre de *Instituciones de Derecho romano*; y *Derecho canónico* se denomina ahora, como en épocas anteriores, *Instituciones de Derecho canónico*¹⁷. Por tanto, aquel plan que se aprobó como provisional, se mantuvo vigente durante toda la II República.

¹⁵ «También manifiesta el Sr. Decano haber recibido respuesta del de Filosofía y Letras en cuanto a la forma de aprobación de las asignaturas que en esta última Facultad han de cursar los alumnos que aspiren a la Licenciatura en Derecho, aceptándose la fórmula propuesta y acordándose que el Sr. Decano se ponga de acuerdo con el de Filosofía y Letras en cuanto al detalle de su aplicación». *Actas de la Junta de Facultad de 8 de mayo de 1834*, folio 399.

¹⁶ Esto ocurrió también en las demás facultades de Derecho de España. M.^a F. Mancebo lo ha estudiado también para el caso concreto de la Universidad de Valencia. «Entre el 12 y el 17 de septiembre de 1931, una serie de decretos establecían los planes de estudio provisionales para las cinco Facultades: medicina, derecho, filosofía y letras, farmacia y facultades de ciencias. Eran para el curso que se iniciaba 1931-32, pero de hecho se fueron prorrogando a lo largo de la República y en la medida que variaban respecto a los de 1928, sucesivas órdenes fueron aclarando las dudas. En conjunto diferían poco de los anteriores...». M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)*, cit., p. 111.

¹⁷ *Anuario de la Universidad de Madrid. Libro del Estudiante año 1935*, pp. 209 a 211.

Antes de continuar con las características de la enseñanza veamos en un cuadro, referido al curso 1934-1935, quienes eran los encargados de impartir la docencia:

PROFESOR	ASIGNATURA	CURSO
Manuel García Moriente, José Gaos y José Zubiri	Introducción a la Filosofía	Preparatorio
Juan Hurtado	Lengua y Literatura españolas	Preparatorio
Antonio Ballesteros	Historia de España	Preparatorio
Andrés Ovejero, Pío Zabala y Antonio Ballesteros	Historia general de la Cultura	Preparatorio
Emeterio Mazorriaga, Alemany Selfa, Agustín Millares, U. González de la Calle y Dr. Zetta	Lengua latina	Preparatorio
José Castillejo y Duarte	Instituciones de Derecho romano	Primero
Antonio Flores de Lemus	Economía política	Primero
Galo Sánchez	Historia del Derecho	Primero
Nicolás Pérez Serrano	Derecho político	Segundo
Eloy Montero	Instituciones de Derecho canónico	Segundo
Federico de Castro	Derecho civil (parte general)	Segundo
Felipe Sánchez Román	Derecho civil (primer curso)	Tercero
José Gascón y Marín	Derecho administrativo	Tercero
Luis Jiménez de Asúa	Derecho penal	Tercero
Felipe Clemente de Diego	Derecho civil (segundo curso)	Cuarto
Antonio de Luna García	Derecho internacional público	Cuarto
Francisco Beceña	Derecho procesal (primer curso)	Cuarto
Agustín Visuales	Hacienda pública	Cuarto
Joaquín Garrigues	Derecho mercantil	Quinto
José Yanguas Messía	Derecho internacional privado	Quinto
Francisco Beceña	Derecho procesal (segundo curso)	Quinto
Pendiente de provisión	Filosofía del Derecho	Quinto

2. Las asignaturas prácticas

Las actas de la Junta de Facultad nos hablan de otros asuntos relativos al plan de estudios y a la ordenación de las enseñanzas. Las

del 11 de diciembre de 1930 nos indican que se llevó al orden del día la cuestión de las asignaturas con clases prácticas. Hubo entonces diversas propuestas para que se superase esta distinción entre asignaturas puramente teóricas y asignaturas prácticas, y se pidió a cada profesor que manifestase si su asignatura iba a tener clases prácticas o no. Como sabemos, la declaración de asignatura con clases prácticas llevaba anejo una cantidad adicional —derechos de prácticas— que debía ser abonada junto con los derechos de la matrícula de esa asignatura. Ese dinero se destinaba a abonar los gastos extraordinarios que conllevaba el material utilizado junto con los sueldos del personal que atendía las clases prácticas.

Se acordó en aquella reunión del 11 de diciembre mantener por el momento en aquel curso de 1930-1931 la relación de asignaturas puramente teóricas. Eran asignaturas teóricas de Licenciatura *Derecho natural, Derecho romano, Economía política, Derecho civil 1º y 2º curso, Procedimientos judiciales y Hacienda*¹⁸. Las demás asignaturas tendrían anejas clases prácticas y tenían así la consideración de asignaturas prácticas. He aquí la crónica del debate suscitado que nos presentan las actas de aquella Junta de Facultad de 11 de diciembre de 1930¹⁹:

El Sr. Decano planteó a sus compañeros la cuestión de las clases prácticas en relación a los derechos de las mismas: invitando a los profesores, que ya no lo hubieran hecho, a que fijasen en definitiva si en sus respectivas cátedras habría o no en el presente curso clases prácticas. El profesor Sr. Castillejo estimó que debían englobarse los derechos de matrículas y los de prácticas para formar en la parte correspondiente el fondo necesario para pagar el material y el personal de esta enseñanza. El profesor Sr. Yanguas dijo que su cátedra no sentía una necesidad inmediata y urgente para estos fines, puesto que del fondo de su sueldo, que no había percibido durante el tiempo que estuvo sin desempeñar la cátedra, había todavía un neto de cuatro mil pesetas. El profesor Sr. Posada opinó que se debía este año todavía cobrar los derechos de prácticas. Y el Sr. Saldaña se convino con esta opinión dándole carácter general a todas las asignaturas de la Facultad.

¹⁸ También había asignaturas teóricas en el Doctorado: *Política social y legislación comparada del Trabajo, Filosofía del Derecho, Derecho municipal, Estudios superiores de Derecho político y Estudios superiores de Derecho privado*.

¹⁹ *Actas de la Junta de Facultad de 11 de diciembre de 1930*, folio 215.

El Secretario que suscribe, refiriéndose a la Cátedra de Derecho civil de conjunto, informó que, además de las tres clases semanales teóricas, tenía otras tres clases prácticas en la semana que daba en colaboración con los profesores sus auxiliares don Antonio Sacristán y don Francisco Cifuentes, distribuyéndose entre los tres las tres secciones en que para los efectos de esta clase de repaso había dividido la matrícula general y que hacía notar también que el importe de la acumulación que percibía por esta cátedra lo entregaba mensualmente al Decano de la Facultad, con aspiración de que con ese fondo se pudiesen atender a los varios gastos de los que ocasiona esta enseñanza, si bien hacía constar la insuficiencia de estos recursos para dicho fin; no obstante lo cual no se encontraba inclinado a declarar prácticas las referidas clases, puesto que más que gastos de material propiamente lo que habría era la necesidad de gratificar al personal que le prestaba tan eficaz colaboración; juró que en todo caso quedaba a las órdenes del Decano para que esta cátedra se clasificara entre las enseñanzas puramente teóricas o entre las que se acrediten clases prácticas.

El Sr. Decano propuso, y así se acordó, dirigirse al Ministerio con el sentido de la propuesta del Sr. Castillejo, fijándose los derechos en diez pesetas y que por este curso no paguen prácticas las asignaturas de Derecho natural, Derecho romano, Economía política, Derecho civil 1.º y 2.º curso, Procedimientos judiciales, Hacienda, Política social y legislación comparada del Trabajo, Filosofía del Derecho, Derecho municipal, Estudios superiores de Derecho político y Estudios superiores de Derecho privado.

En la Junta de Facultad de nueve meses después, del 11 de septiembre de 1931, muy cercano ya el comienzo del nuevo curso académico, se estudió nuevamente el asunto de las asignaturas prácticas de la carrera de Derecho. En aquella ocasión se acordó que se mantuviera la misma lista de asignaturas prácticas vigente en el curso pasado, añadiendo a ella la asignatura de *Derecho civil (parte general)*, que explicaba entonces Felipe Clemente de Diego²⁰. Por ello mismo, las asignaturas de licenciatura que tendrían carácter práctico en el curso 1931-1932 serían las siguientes: *Historia del Derecho*,

²⁰ «En lo relativo a las asignaturas que han de tener carácter de prácticas en el curso próximo, se acuerda que subsistan las listas formadas en el pasado curso, añadiendo a ella la asignatura de derecho civil (parte general) que explica don Felipe Clemente de Diego», *Actas de la Junta de Facultad del 11 de septiembre de 1931*, folios 259-260.

*Derecho político, Derecho canónico, Derecho civil (parte general), Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho internacional público, Derecho mercantil, Derecho internacional privado y Filosofía del Derecho*²¹.

En la primera reunión de la Junta de Facultad al comienzo de curso siguiente, el 2 de octubre de 1933, se volvieron a determinar las asignaturas que habían de devengar derechos de prácticas y se acordó que fueran las mismas que en el curso anterior, incluyendo también los dos cursos de *Derecho procesal* y teniendo en cuenta la consiguiente rotación de la asignatura de *Derecho civil*²².

Como comprobamos, la tendencia era a ir haciendo prácticas todas las asignaturas. Detrás de esta medida estaban varias razones: el establecimiento de clases prácticas suponía un incremento del número de clases, lo que implicaba también un pequeño suplemento económico y la posibilidad de dotar una plaza complementaria para atender esas clases prácticas. Todo ello también redundaba en una mejor preparación para el alumno, así como en prestigio para la asignatura²³.

3. *La división de la cátedra de Derecho internacional público y privado*

Muy interesante resultó un informe de la Junta de Facultad solicitando del Ministerio el desglose de la cátedra de Derecho internacional público y privado en dos cátedras distintas, una para el público y otra para el privado. Ambas pertenecían a una única materia, *Derecho internacional* y formaban dos asignaturas separadas en los planes de estudio, aunque sin embargo eran impartidas desde su creación desde una cátedra común. La propuesta de separar ambas

²¹ Tres asignaturas del Doctorado tendrían carácter práctico: *Historia del Derecho internacional, Estudios superiores del Derecho penal y Antropología criminal e Historia de las instituciones políticas y civiles de América, Actas de la Junta de Facultad del 11 de septiembre de 1931*, folios 259-260.

²² *Acta de la Junta de Facultad del 2 de octubre de 1933*, folio 380.

²³ Sobre el particular, hace una referencia D. Comas en su trabajo «La enseñanza del Derecho en Valencia durante la autonomía de César Silió (1919-1921)», en A. Mora (ed.), *La enseñanza del Derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*, cit., pp. 86-87.

asignaturas en sendas cátedras distintas fue debatida y aprobada en la Junta de Facultad del día 3 de noviembre de 1931. Fruto de esta propuesta fue un interesante dictamen que la facultad decidió elevar al Ministerio, en el que se reivindica con diversos argumentos la necesidad de efectuar la división de la cátedra de Derecho internacional público y privado en dos cátedras independientes²⁴.

Se presenta en el orden del día de la Junta la propuesta que se desea elevar al Ministerio, aprovechando para ello el hecho de que la cátedra de Derecho internacional público y privado se encuentra vacante en la Universidad²⁵. He aquí los motivos para esta división²⁶:

La Junta de Profesores de Derecho ha creído de su deber proponer a V. E. que por los altos motivos de conveniencia para la enseñanza y la investigación científica se divida en dos Cátedras distintas y correspondientes a cada una de las dos disciplinas jurídicas que hoy forman el contenido de la mencionada vacante. El progreso ganado en la actualidad por los estudios jurídicos internacionales, su considerable potencia teórica y práctico desarrollo que plasma en tantas instituciones de la sociedad internacional y otras variadas manifestaciones de la actividad legislativa y paccionada de los diferentes Estados de uno y otro continente; la misma complejidad instrumental y técnica de sus vastos programas respectivos; y, en fin, las amplias posibilidades de su investigación, vienen a hacer notoria la necesidad de desdoblar aquella Cátedra que hoy reúne tan extenso contenido. Por otra parte, la dualidad de método jurídico con que ha de actuar el investigador en las respectivas disciplinas internacionales, pública y privada, es tan hondamente diversa que casi cierra la esperanza de formar maestros que puedan rendir el fruto de su inteligente labor en construcciones jurídicas en verdad tan separadas entre sí. Educación jurista, de riguroso análisis y precisión, ha de tener ante todo el internacionalista de derecho privado que ha de levantar sus sistema de derecho comparado sobre la base de un conocimiento cabal de las instituciones civiles, mercantiles y procesales principalmente. De

²⁴ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

²⁵ «Aprovecha la Facultad la ocasión de estar vacante la Cátedra de Derecho internacional público y privado en Madrid, para proponer a la superioridad que se divida dicha cátedra en dos distintas: una de Derecho internacional público y otra de Derecho internacional privado», *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

²⁶ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

modo distinto, el internacionalista de derecho público, sin perjuicio de sus calidades de jurista, edifica sus principales construcciones sobre normas de alta política internacional en las que influyen preeminentemente factores económicos y sociales que tantas veces escapan a lo menos en su medida internacional a las funciones concretas y limitadas de la jurisprudencia. Debido a esto, es rarísimo en el mundo de la cultura contemporánea hallar un profesor que aplique con eficacia su trabajo a ambas disciplinas. Y casi con excepción quedaría señalada la Universidad española al mantener todavía la Cátedra única en materia de derecho internacional. Siendo así que la experiencia hasta ahora lograda ha producido, sin duda, en nuestras facultades de derecho, maestros brillantes en una u otra de ambas disciplinas; pero probablemente ninguno que haya servido con igual eficacia el progreso de sus respectivas investigaciones.

Seguidamente renueva la Junta su solicitud de división de la cátedra, por los motivos expuestos, y plantea una fórmula de convocatoria, habida cuenta que la vacante de catedrático de *Derecho internacional público y privado* ya había sido sacada a concurso²⁷:

Por las consideraciones expuestas entiende esta facultad que sería oportuno hacer el ensayo de dividir en la Universidad de Madrid la cátedra actualmente vacante en dos: una de Derecho internacional público y otra de Derecho internacional privado, y puesto que a la hora presente está anunciada la provisión de la vacante, dictar disposición aclaratoria por la que se reservara a los opositores y firmantes de la anunciada cátedra su derecho a opositar en aquella de las dos que por el Ministerio se determine y anunciar la otra a oposición libre para que concurran a ellas cuantos solicitantes lo deseen dentro de las condiciones reglamentarias.

El Ministerio atendió la petición de la Junta de Facultad y se constituyeron dos cátedras independientes, una de Derecho internacional público y otra de Derecho internacional privado, tal y como aparece hoy en día. José Yanguas Messía se quedó como catedrático de la asignatura de Derecho internacional privado y la cátedra de Derecho internacional público la asumió Antonio de Luna²⁸.

²⁷ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folios 268 ss.

²⁸ *Anuario de la Universidad de Madrid, curso 1934-1935*.

4. *El impulso de los estudios de Economía*

La cuestión social latente en la segunda mitad del siglo XIX y en buena parte del siglo XX, alertó a nuestros gobernantes sobre la necesidad de contar con cualificados expertos en Economía y Sociología, que fueran capaces de abordar las múltiples cuestiones de todo tipo que se planteaban en estos campos. A partir de la crisis de 1929 se observa una considerable preocupación oficial, que queda reflejada en las continuas iniciativas del Ministerio de Instrucción Pública para fomentar especialmente los estudios de Economía en la Universidad. Ahí estuvieron las reformas de Marcelino Domingo en 1931 o de Fernando de los Ríos en 1933. Las actas de la Junta de Facultad de Derecho atestiguan a partir del establecimiento de la República constantes referencias a esta preocupación del Ministerio.

Como es sabido, el ministro de Instrucción Pública del Gobierno provisional, Marcelino Domingo, tenía entre sus planes la creación de una facultad de Economía. El 26 de agosto de 1931 aprueba una orden ministerial en la que pide a la facultad de Derecho que informe antes del 15 de septiembre acerca del proyecto de creación de una nueva facultad de Estudios Económicos²⁹.

En la Junta del 15 de septiembre fue estudiada esta orden ministerial y se presenta un informe en el que se duda de la eficacia de la creación de una facultad de Economía. Tras plantearse la cuestión de si lo que se busca realmente son expertos en Economía o personas capacitadas para la gerencia de empresas, se señala que España ya cuenta con Escuelas Superiores Técnicas y con las de Comercio, y que es privativa de ellas la enseñanza de las diversas técnicas de Empresa. Para los ponentes, se considera un error que la Universidad intente apropiarse de una función que no le es tan propia³⁰. Y que siendo lo más urgente la formación de técnicos, el Estado

²⁹ Cfr. M^a F. Mancebo, «De la economía política a la facultad de ciencias económicas», en L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (ed.), *Las universidades hispánicas: de la monarquía de los Austrias al centralismo liberal*. V. Congreso Internacional sobre historia de las universidades hispánicas, Salamanca, 1998, II, Siglos XVIII y XIX, Universidad de Salamanca/Junta de Castilla y León, Salamanca, 2000, pp. 235-245

³⁰ *Actas de la Junta de Facultad del 15 de septiembre de 1931*, folios 246 a 252.

debe atender con especial interés sobre todo a las Escuelas de Comercio. A la Junta le parece que la enseñanza de la ciencia económica, como ciencia de las llamadas morales, es más propia de formar parte de una facultad de Derecho, por su vinculación con el mundo jurídico³¹. Este interesante informe, que por su interés, reproducimos íntegro en un apéndice documental, será tenido en cuenta por el Ministerio a la hora de posponer el inevitable nacimiento de las futuras facultades de Economía.

El dictamen no termina aquí sino que incluye con un proyecto de plan de estudios de una nueva facultad de Economía, detrás del cual se intuye la mano de Flores de Lemus³². El plan organiza las enseñanzas en cinco cursos e incluye también la ordenación de los estudios de Doctorado, la selección del profesorado y la organización de unos cursos especiales complementarios³³.

El informe³⁴ fue finalmente aprobado en la siguiente Junta del 28 de septiembre de 1931³⁵ y fue remitido al Ministerio. Como sabemos, el proyecto gubernamental no siguió adelante. Tras la aprobación de la Constitución hubo cambio en la cartera de Instrucción Pública y Fernando de los Ríos sustituyó a Marcelino Domingo. Solamente en marzo de 1933, bajo este ministro, hubo un nuevo intento del nuevo ministro de retomar esta iniciativa, con la presentación de un proyecto de ley de bases, publicado en la Gaceta de Madrid de 19 de marzo, que finalmente no llegaría a discutirse en Cortes, y en el que se pretendía crear una sección de Económicas, como una especialidad de la licenciatura de Derecho³⁶.

El rechazo a la creación de una facultad de Economía trajo como consecuencia la búsqueda de vías alternativas para introducir los estudios de Economía en la Universidad. Por ese motivo, el minis-

³¹ *Actas de la Junta de Facultad del 15 de septiembre de 1931*, folios 246 a 252.

³² *Actas de la Junta de Facultad del 15 de septiembre de 1931*, folios 246 a 252.

³³ Vid. Apéndice documental.

³⁴ Este interesante informe fue publicado en el *Boletín de la Universidad de Madrid*, de octubre de 1931.

³⁵ *Actas de la Junta de Facultad del 28 de septiembre de 1931*, folios 252 a 261.

³⁶ Vid. M^a F. Mancebo, «De la Economía política a la Facultad de Ciencias Económicas», cit., p. 243.

tro de Instrucción Pública tuvo contactos en aquel verano de 1932 con diversas personalidades del mundo de las Ciencias Económicas. Entre los convocados se encontraba el catedrático de Economía política de la Universidad de Madrid, Flores de Lemus. En la siguiente Junta de Facultad, del 2 de julio de aquel año, Flores de Lemus informó de esta entrevista. El deseo del Ministerio era que se comenzara a impartir algún curso de Economía en la facultad de Derecho³⁷, en la línea de la propuesta realizada por la facultad de Derecho en su informe del 15 de septiembre. Inmediatamente se planteó en la Junta el problema de recabar los fondos necesarios para sufragar estos cursos y se propuso acudir a una partida del presupuesto titulada 'profesores de curso':

El Sr. Decano interviene para decir que al parecer el antecedente que existe de este deseo es la partida del presupuesto de 75000 pesetas consignadas para 'profesores de curso'. En la junta anterior en la que no estaban presentes ni el Sr. Flores ni el Sr. Olariaga se entendió que esta consignación era para remunerar a los profesores encargados de grupos de estudiantes en aquellas cátedras en las que por la superabundancia de estudiantes, no puede desempeñarla solamente el catedrático ni aun ayudado por el auxiliar de la asignatura»³⁸.

En los debates de aquella Junta³⁹ los profesores se mostraron favorables a la organización de cursos sobre estas materias, pero al mismo tiempo solicitaron que se garantizasen unas cantidades para sufragar los gastos que aquéllos debían conllevar⁴⁰.

Para la organización de los cursos de Economía la Junta considera que el ponente natural debía ser Flores de Lemus, quien más adelante señala que ya hizo al ministro una propuesta o sugerencia, aunque sin saber que la cantidad consignada había sido ya 'bloqueada' por la Junta anterior. Esta propuesta consistía en cuatro cursos de Economía, impartidos por conocidos cuatro profesores⁴¹, en los

³⁷ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

³⁸ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

³⁹ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

⁴⁰ Al haberse asignado la partida presupuestaria 'profesores de curso' a otro fin en la Junta anterior, podría ser difícil contar con esa cantidad, *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

⁴¹ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folio 327.

que se estudiarían temas de *Teoría de la Hacienda pública, política hidráulica, política y administración ferroviaria y dinero y crédito*⁴². Estos cursos propuestos eran los siguientes:

PROFESOR	CURSO
Agustín Visuales	<i>'Intentos de revisión de la teoría de la Hacienda Pública'</i>
Pedro González Quijano	<i>'Política hidráulica'</i>
Juan Barceló (no universitario)	<i>'Política ferroviaria y administración económica de los F.C.'</i>
Francisco Bernés	<i>'Dinero y Crédito'</i>

Los registros de las actas de aquella Junta de Facultad reflejan varios interesantes debates sobre esta materia, en el que intervinieron activamente distintos profesores. He aquí un fragmento entresacado de las actas de la Junta del 2 de julio de 1932⁴³:

Y en materia de Teoría de la Administración, no conociendo a persona preparada le pidió el ministro que le diera algún nombre para que estudiara en el extranjero, dando el Sr. Flores el de su ayudante Sr. Prados Urquijo.

A esto último opone el Sr. Gascón una gran reserva porque dice, porque hoy no se estudia ya la Teoría de la Administración al modo de Ciencia de la Administración. Hoy solamente estudian la Técnica Administrativa de los servicios o el Derecho administrativo.

El Sr. Flores advierte que esto está ocurriendo en todas las disciplinas, también en la Hacienda donde cada vez se separa más la técnica de la hacienda del Derecho tributario.

El Sr. Olariaga quiere hacer notar que en la propuesta debería incluirse personas que están dentro de la facultad.

Después de breve discusión sobre las personas que dentro de la facultad podrían encargarse de cursos de materias económicas, el mismo Sr. Olariaga se ofrece para dar un curso sobre Política monetaria, que ya ha hecho este curso para sus alumnos de Doctorado. Hace constar que respecto al problema económico no se lo plantea porque no desea obtener una compensación económica. Se añade este curso a la propuesta del Sr. Flores [...]

⁴² *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folio 327.

⁴³ *Actas de la Junta de Facultad del 2 de julio de 1932*, folios 324 a 328.

En la primera Junta del curso siguiente, celebrada el 15 de octubre de 1932, el decano dio cuenta de haber tenido una nueva entrevista con el ministro de Instrucción Pública para tratar de los estudios económicos en la facultad. Tras esta entrevista, el decano se había reunido con los profesores encargados de estos cursos. En su opinión, la facultad debía autorizar a esta nueva Junta de Estudios Económicos para que completase el cuadro de cursos. Propone que se dé alguno de Historia y que se traiga algunos profesores extranjeros de reconocida competencia, siguiendo en esto algunas sugerencias del ministro. La facultad, tras estudiar el asunto, concede la solicitada autorización⁴⁴.

De esta manera, cada año, en los primeros meses del curso académico se estudiaba y aprobaba el listado de cursos especiales y los profesores que debían impartirlos. Normalmente se repetían algunos de estos cursos y se incrementaba el número de los cursos a impartir. Por ejemplo, en el curso 1932-1933, en el listado de cursos aprobados no sólo se repetían varios de ellos, sino que se doblaba su número. Según el *Anuario de la Universidad de Madrid* para ese periodo⁴⁵, los cursos económicos aprobados eran los ocho siguientes⁴⁶:

PROFESOR	CURSO
Juan Barceló	'Política ferroviaria'
Francisco Bernés	'Dinero y bancos'
Ramón Carande	'Historia de la Economía'
Pedro González Quijano	'Política hidráulica'
Esteban Terradas	'Estadística matemática'
Agustín Visuales	'Intentos de revisión de la Hacienda pública'
José Gascón y Marín	'Concesiones administrativas'
Luis Olariaga	'Política monetaria'

Correspondiendo al interés gubernamental, la facultad siguió muy de cerca la organización y funcionamiento de estos cursos. Ello

⁴⁴ *Actas de la Junta de Facultad de 15 de octubre de 1932*, folios 334 a 336.

⁴⁵ *Anuario de la Universidad de Madrid*, curso 1932-1933, p. 203.

⁴⁶ *Actas de la Junta de Facultad de 16 de febrero de 1933*, folios 348 y 349.

implicaba elaborar con tiempo los programas, invitar a expertos extranjeros⁴⁷ u obtener las dotaciones suficientes para sufragar los gastos de los mismos. Las actas de la Junta de Facultad reflejan constantemente este interés⁴⁸, y en este periodo es rara la Junta en la que no hay una referencia explícita a estos cursos económicos o a los administrativos⁴⁹. Así, por ejemplo, en la Junta del 16 febrero de 1933 se hizo un detenido repaso de los cursos y de los profesores que habían de impartirlos el año siguiente. Se informó de que la consignación para los cursos contemplada en los anteriores presupuestos generales del Estado había desaparecido y se había sustituido por una consignación de 60.000 ptas. a favor de la facultad. Sobre esta consignación se acordó consultar al Ministerio. Se propuso prorrogar la situación de sus profesores, a los que se abonaría la cantidad mensual de 500 ptas.

Como hemos ido comprobando, en la organización de estos cursos económicos —lo mismo que los administrativos— participaba activamente el Ministerio de Instrucción Pública⁵⁰ y quedará de manifiesto de diversos modos el interés oficial por su lanzamiento⁵¹. En aquellos meses se anuncian también propuestas de diversos cursos especiales para la formación de militares⁵² o de determinados

⁴⁷ También se anunció entonces que iba a explicar un curso don Daniel Cossio Villegas, profesor de Economía de una universidad de México, *Actas de la Junta de Facultad del 16 de febrero de 1933*, folios 346 a 351; y *Actas de la Junta de Facultad del 23 de marzo de 1933*, folios 352 a 357.

⁴⁸ *Actas de la Junta de Facultad del 16 de febrero de 1933*, folios 346 a 351

⁴⁹ *Actas de la Junta de Facultad del 15 de octubre de 1932*, folio 334; *Actas de la Junta de Facultad del 22 de noviembre de 1932*, folios 337 a 340;

⁵⁰ Unos días después de la Junta del 16 de febrero, el Decano tuvo una reunión sobre la organización de estos cursos con el ministro, a quien informó detenidamente de la marcha de los mismos, *Actas de la Junta de Facultad del 23 de marzo de 1933*, folios 352 a 357.

⁵¹ «Se da conocimiento de una comunicación que remite al Consejo Nacional de Cultura solicitando designe la Facultad de su seno personas a quienes poder consultar acerca de los estudios de Comercio y Económico. Se designa con dicho fin a los Sres. Flores de Lemus y Garrigues, para sustituirles, en su caso, a los Sres. Olariaga y Gascón y Marín, respectivamente», *Actas de la Junta de Facultad de 13 de mayo de 1933*, folios 362 a 367.

⁵² «Dada lectura de un oficio de la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra pidiendo la designación de tres catedráticos para dar una serie de conferencias en el curso de preparación de coroneles para el ascenso, sobre

funcionarios. En otras ocasiones se anuncia la visita de prestigiosos catedráticos extranjeros invitados, a iniciativa del ministro, para impartir en la facultad conferencias de Economía⁵³.

Este respaldo oficial continuará bien avanzada la República. También continuaba el elevado número de los cursos impartidos. En el periodo 1934-1935, continúan siendo ocho los seminarios especiales de estudios económicos que organizaba la facultad de Derecho, según se especifica en el *Anuario de la Universidad de Madrid*:

PROFESOR	CURSO
Ramón Carande	'Historia general de la Economía europea a partir de la Constitución de los Estados nacionales a partir del siglo XVIII'

Economía política, Economía social y Derecho de gentes. Se acuerda designar por ahora a los titulares de las respectivas cátedras de Economía Política, Política Social y Derecho Internacional Público, sin perjuicio de que si en la época en que han de darse las conferencias alguno de ellos no pudiese asistir, se designará al sustituto», *Actas de la Junta de Facultad de 14 de enero de 1933*, folio 345. También se impartieron conferencias para militares en el curso siguiente: «Comunica el Sr. Decano a la Junta haberse recibido del Ministerio de la Guerra, como el curso anterior, el ruego de que catedráticos de nuestra Facultad expliquen en el Curso de capitanes varias conferencias sobre temas de Derecho internacional y de Economía política. La Junta de Facultad acuerda acceder gustoso a este ruego y designar como profesor encargado de las conferencias de derecho internacional al Sr. Lima y, en su defecto, al Sr. Gascón y Marín. En cuanto a las de Economía, el Sr. Decano, de acuerdo con los Sres. Flores de Lemus, hará la designación del profesor que haya de explicarlas», *Actas de la Junta de Facultad de 20 de enero de 1934*, folio 387.

⁵³ «El Sr. Flores de Lemus da cuenta de sus gestiones para obtener de los profesores Cassell y Sombart que explicasen cursillos sobre materias económicas en la Facultad, siguiendo la iniciativa del Ministro. El primero se ha excusado, y el segundo pide que se le pague además de la remuneración de las conferencias, los gastos de viaje para él y para su señora, que importarán unas tres mil pesetas. El profesor daría las conferencias en alemán, siendo traducidas inmediatamente por un intérprete. La facultad acuerda aprobar estas gestiones y dar un voto de confianza al Decano para que de acuerdo con el Ministro resuelvan este asunto», *Actas de la Junta de Facultad de 14 de enero de 1933*, folios 345 y 346.

PROFESOR	CURSO
Enrique Rodríguez Mata	'Dinero y bancos'
Julio Tejero Nieves	'Doctrinas sobre el capital e interés'
Luis Olariaga y Pajana	'Política monetaria'
Jesús Prados Arrarte	'Política comercial exterior'
Federico Repáraz	'Política ferroviaria'
Carlos Mendoza	'Apuntes sobre la industria productora de electricidad en sus aspectos económico, social y político'
Manuel Díaz Pedregal	'Las haciendas locales y la regional'

5. *Los estudios especiales de Administración en la Facultad de Derecho*

Si existía un claro interés gubernamental por impulsar los estudios de Economía, otro tanto ocurría con los estudios sobre la Administración. Una de las misiones encomendadas a la Universidad era la formación de cuadros de funcionarios válidos para lograr una Administración más eficaz. Y el medio arbitrado es la impartición de unos cursos especiales administrativos. Parece que al igual que los estudios sobre Economía, a estos estudios administrativos se les da un fuerte impulso a partir del establecimiento de la República.

Con este fin se prevé que la facultad ofrezca también anualmente una serie de cursos especiales. Cada año la Junta mandaba elaborar un proyecto, bajo la coordinación de un catedrático, que debía ser presentado formalmente a la facultad para su aprobación. A comienzos del curso 1931-1932 —en el que se instauraría la República— se encomendó la coordinación de estos cursos al catedrático de Derecho administrativo José Gascón y Marín. Estaba previsto que estos cursos comenzasen el 15 de noviembre y que se prolongasen hasta el 15 de abril. Por ello, en la Junta anterior, de 3 de noviembre, Gascón y Marín presentó un proyecto que constaba de seis cursos. Cada uno de ellos sería impartido un día de la semana distinto, de lunes a sábado, y por profesores distintos. Abarcaba materias de instituciones de Derecho privado, régimen jurídico-administrativo, Derecho administrativo internacional, haciendas locales, grandes municipios e instituciones continentales de Dere-

cho público⁵⁴. Concretamente ésta era la propuesta para el curso 1931-32:

DÍA	PROFESOR	CURSO	FECHA DE COMIENZO
Lunes	Enrique Ramos	'Instituciones de Derecho privado'	25 de noviembre
Martes	Miguel Cuevas	'Régimen jurídico administrativo'	17 de noviembre
Miércoles	José Gascón y Marín	'El nuevo Derecho administrativo internacional'	18 de noviembre
Jueves	Fernando Feijoo	'Haciendas locales'	19 de noviembre
Viernes	Adolfo Posada	'Los problemas en los grandes municipios'	15 de enero de 1932
Sábados	Nicolás Pérez Serrano	'Derecho público.: Instituciones continentales'	21 de noviembre

En la misma Junta, Gascón y Marín señaló que el Ayuntamiento había estado dos veces a punto de conceder consignación para los cursos de funcionarios administrativos y que esa designación había quedado sin efectividad por los cambios y vaivenes políticos. El proyecto de Gascón y Marín fue finalmente aprobado por la Junta de Facultad⁵⁵.

En otra Junta posterior, la del 2 de julio de 1932, Flores de Lemus informó a la facultad de una entrevista mantenida recientemente con el ministro de Instrucción Pública en la que hablaron de la preocupación existente en las autoridades al observar carencias de técnica administrativa en el personal administrativo. Por ello, el ministro proponía que se enviase a algunos alumnos al extranjero a

⁵⁴ *Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folio 272; *Universidad de Madrid. Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 1932 a 1933*, p. 103.

⁵⁵ En el proyecto presentado se añadían más datos sobre la matrícula y la fecha de comienzo de cada curso. En la misma Junta preguntó también Gascón y Marín a la Facultad si quería que continuase sus gestiones en ese sentido. Las actas concluyen de forma escueta: y así se acordó (*Actas de la Junta de Facultad del 3 de noviembre de 1931*, folio 277).

estudiar cuestiones como la técnica sanitaria, que entonces estaban servidas por médicos carentes de toda formación jurídica. En general, nuevamente se transmitió la preocupación del Ministerio de prodigar los estudios administrativos en las Universidades. Ya por entonces, en el caso de la Universidad de Madrid, desde hacía tiempo estaba ya funcionando en la facultad de Derecho una sección de estudios administrativos, creada para impartir cursos especiales sobre Administración.

Aquella Junta estudió los deseos del ministro de Instrucción Pública. Si lo que quería el ministro era preparar unos estudios administrativos partiendo de la investigación de sistemas extranjeros, considera la Junta que lo más interesante era enviar algunos alumnos aventajados a estudiar la organización de los Ministerios de la Guerra y de Agricultura de Bélgica y los de Hacienda de Francia y Alemania, en los que se había llevado a cabo la mayor racionalización del servicio.

En una Junta posterior, del 26 de septiembre de 1932, tras aprobarse y ratificarse los acuerdos de la Junta anterior, entre ellos el más importante relativo a los cursos de disciplinas económicas⁵⁶, sus actas hacen referencia a unos cursos especiales de Administración que habrán de impartirse en el curso siguiente⁵⁷. La crónica de las actas nos informa de diversos asuntos sobre el particular:

El Sr. Gascón hace notar que al lado de estos estudios económicos, la Facultad establecerá como otros años cursos sobre estudios administrativos, para cuya organización podría obtenerse una subvención del Ayuntamiento, haciendo una escuela de estudios municipales, pidiéndoselo al actual alcalde. La Junta acuerda que el Sr. Gascón siga sus gestiones en el sentido indicado. El Sr. Pérez Serrano advierte que ha leído en algún periódico una queja de los escolares de que los estudios económicos se preparasen en Barcelona y no en Madrid. Pide a la representación escolar que rectifique [...]

En aquella Junta se propusieron cinco cursos, sobre los temas siguientes⁵⁸:

⁵⁶ *Actas de la Junta de Facultad de 26 de septiembre de 1932*, folio 329.

⁵⁷ *Actas de la Junta de Facultad del 26 de septiembre de 1932*, folios 329 a 330.

⁵⁸ *Actas de la Junta de Facultad de 26 de septiembre de 1932*, folio 329.

PROFESOR	CURSO
José Gascón y Marín	'Lo contencioso-administrativo'
Nicolás Pérez Serrano	'El sufragio'
Miguel Cuevas y Cuevas	'El régimen administrativo'
Fernando Feijoo Montes	'Las Haciendas locales'
Román Riaza y Martínez Osorio	'Historia política administrativa'

Aparte de estos cursos, se organizaron también algunos cursos especiales de distintos campos del Derecho, dados todos ellos por profesores extranjeros y a cargo del presupuesto de la facultad: Rudolf Stamler, *Filosofía del Derecho*; Schulten, *La vida en Roma a través del Corpus Iuri*; Mirkiné Guetzevitch, *Derecho constitucional*; Francesco Ferrara, *Derecho civil*; Duguit, *Derecho público*; Barthélemy (decano de París), *Derecho público*; Redslob (Estrasburgo), *Derecho internacional*; Maestre, *Derecho administrativo*; Jean Paulin.

Comprobamos que la financiación de los cursos es una preocupación constante en los miembros de la Junta. No en vano, suponían ya de por sí un esfuerzo académico añadido para unos profesores con una gran diversidad de obligaciones docentes. En la Junta del 16 de febrero de 1933 se acordó que los profesores de los cursos administrativos fueran retribuidos con la cantidad de 1.250 ptas., abonable al finalizar los cursos en el mes de abril siguiente⁵⁹. Por otra parte, como el interés oficial es importante, lo mismo que en el caso de los estudios sobre Economía, se va a considerar la posibilidad de dotar algunas becas para ampliar estudios en el extranjero, como la concedida al profesor ayudante de la facultad, Prados Arrarte⁶⁰.

Al acabar el año académico, la facultad hace balance de la marcha de estos cursos y hace planes para continuar con los mismos el curso siguiente⁶¹. Y como será ya habitual, la Junta encomienda al

⁵⁹ *Actas de la Junta de Facultad de 16 de febrero de 1933*, folios 348 y 349.

⁶⁰ También se comunica a la Facultad que se ha becado al profesor ayudante de Economía política Sr. Prados Arrarte para que vaya a Alemania a ampliar estudios sobre organización administrativa y que se han dotado otras becas con el mismo fin *Actas de la Junta de Facultad del 15 de octubre de 1932*, folio 334; *Actas de la Junta de Facultad del 22 de noviembre de 1932*, folios 337 a 340.

⁶¹ «El Sr. Olariaga recaba, también, que se estudien detenidamente los resultados ofrecidos por los cursos Económico Administrativos», *Actas de la Junta de Facultad de 10 de junio de 1933*, folio 372.

decano junto con los profesores Gascón y Marín —para los cursos de Administración— y Flores de Lemus —para los cursos de Economía—, para que organicen estos cursos conforme a las normas de cursos pasados⁶².

Una última referencia a los cursos económico-administrativos en las actas la tenemos de la Junta de Facultad del día 21 de marzo de 1934. En ella, el decano propuso *motu proprio* convertir los actuales cursos económicos administrativos en un Centro Superior de Estudios Económicos y Políticos. Las fuentes se limitan a señalar que la Junta acogió con agrado el proyecto⁶³.

Lo cierto es que estos cursos sobre Administración en la facultad de Derecho continuaron prodigándose hasta bien avanzada la República. En el curso 1934-1935, la facultad organizaba ya diez cursos sobre esta materia, según se especifica en el *Anuario de la Universidad de Madrid* de aquel año:

PROFESOR	CURSO
José Gascón y Marín	El procedimiento administrativo
Fernando de los Ríos	El proceso histórico de la moderna organización e ideología del Estado totalitario
Nicolás Pérez Serrano	La evolución constitucional desde la última guerra
Luis Jordana de Pozas	Régimen jurídico de los seguros sociales
Recaredo Fernández de Velasco	Circunscripciones intermedias entre el Estado y el municipio: regiones y provincias

⁶² «El Decano da cuenta de que la Junta Económica asesora ha acordado organizar, como en años anteriores, los cursos económicos y administrativos, retribuyéndose a los profesores encargados con arreglo a las disponibilidades económicas de la Facultad. Enterada la Junta, acuerda autorizar el Decano para que, en unión y de acuerdo con los Sres. Gascón y Marín y Flores de Lemus, ultime la organización de los mencionados cursos designando a los profesores encargados conforme a las mismas normas de cursos pasados», *Actas de la Junta de Facultad del 2 de octubre de 1933*, folios 379 y 380.

⁶³ *Actas de la Junta de Facultad del 21 de marzo de 1934*, folios 396 y 397.

PROFESOR	CURSO
Román Riaza	Para la Historia de las ideas políticas
Miguel Cuevas	Gobierno y administración en la Ley Fundamental española
Demófilo de Buen	La jurisdicción del trabajo (derecho español y legislación comparada, especialmente legislación alemana, francesa e italiana)
Adolfo González Posada	La Reforma de la Constitución
Goldschmidt	Problemas jurídicos y políticos del proceso penal

El balance de todo este esfuerzo, promovido por el Ministerio y apoyado por la facultad de Derecho, fue el germen de unos estudios sobre Ciencias Económicas y sobre Ciencias de la Administración, que con el tiempo habrían de desembocar en la creación de nuevas carreras y nuevas facultades. Ello ocurriría pocos años después, tras el parón de la Guerra Civil.

6. *El examen de ingreso en la Universidad*

Al acabar el curso 1931-1932, la Universidad de Madrid ha cambiado mucho con respecto a la Universidad que existía en 1919. Una buena prueba de ello es un informe del entonces decano de Derecho, don Adolfo Posada⁶⁴, fechado en ese final de curso y en el que analiza los nuevos fenómenos de la masificación estudiantil, de la utilidad de la carrera de Derecho y de las enseñanzas allí impartidas de cara a una salida profesional. También se observa cómo las autoridades académicas de Derecho continuaban considerando que los estudios de Economía y de ciencias de la Administración debían corresponder a la docencia de la facultad de Derecho. Ante el exceso de licenciados y doctores en Derecho, Adolfo Posada propo-

⁶⁴ Sobre Adolfo Posada y su labor docente, vid. M. Martínez Neira, «La cuestión pedagógica. Adolfo Posada y la enseñanza del Derecho», *Aulas y saberes. VI Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas*, Valencia, 2003, vol. II, pp. 161 a 172.

ne elevar el nivel de estudios en la Universidad y mejorar los métodos de trabajo⁶⁵:

En efecto, ha aumentado extraordinariamente la población escolar en las facultades de derecho. Hacia el año 1921 yo tenía en mi cátedra de Derecho Político unos noventa matriculados, y al jubilarme, en 1931, dicha cátedra tenía cerca de trescientos, especialmente, según parece, por aumento de la matrícula oficial, respecto de la no oficial.

Para decidir si es excesivo el número de licenciados (y doctores) que al año terminan sus estudios, habría que analizar las causas del aumento observado y las atracciones que socialmente influyen en la elección de la carrera de abogado, lo que pediría un espacio del que no dispongo. Cabe decir que, a mi modo de ver, uno de los motivos del extraordinario aumento de estudiantes de Derecho consiste en la utilidad creciente del conocimiento de las ramas jurídicas para el desempeño, no sólo de funciones de las Administraciones del estado y en las administraciones locales, sino de multitud de profesiones u ocupaciones en el servicio, asesoría, dirección de empresas comerciales e industriales y en oficinas de todo orden. No se olvide que en España las únicas instituciones oficiales de carácter universitario organizadas para los estudios jurídicos y políticos, sociales, económicos, son las facultades de derecho. Creo, sin embargo, aun teniendo en cuenta estas consideraciones, que debe estimarse excesivo el contingente anual de juristas que las Facultades lanzan a la lucha por la vida.

No creo que debe tratarse tanto de contener directamente esa abundancia de abogados y doctores con medidas restrictivas, como procurar que las enseñanzas jurídicas (económicas, políticas y sociales) se organicen al máximo de las apetecidas condiciones de eficacia, seriedad y disciplina social, dentro de la vida universitaria, elevando sin cesar el nivel de los estudios y mejorando sin descanso los instrumentos de trabajo, hasta hacer atractivo y acogedor el hogar universitario.

Contener la abundancia de licenciados con disposiciones artificiosas resultaría arbitrario. Seleccionar el personal futuro, elevando incesantemente el nivel cultural científico y profesional: he ahí el único camino, largo, difícil, sin duda, pero no hay otro.

⁶⁵ Adolfo Posada, «Informe», en *Discurso de apertura de curso de D. Francisco de Castro y Pascual, curso 1932-33*, p. 72.

Y es que, bien avanzado el año 1932, todavía es un tema de permanente debate la reforma universitaria. Era bien conocido el interés del Ministerio de Instrucción Pública por acometer una renovación de la Universidad. Fruto de estos deseos fue el proyecto de ley de bases de marzo de 1933, presentado por el ministro Fernando de los Ríos. Este proyecto estaba formado por 63 bases, de las cuales 18 se referían a cuestiones generales y 20 a las distintas facultades. Aunque el proyecto recibió amplios elogios, lo cierto es que no llegó a debatirse en las Cortes y quedó en un simple intento de reforma⁶⁶.

En todo caso, las Universidades y, particularmente la Universidad de Madrid, tenía muchas cosas que decir en un hipotético intento de reforma universitaria⁶⁷. En aquellos meses, y con este fin, fueron también frecuentes las reuniones de los decanos de las distintas facultades con el ministro de Instrucción Pública. Para el 20 de junio de aquel año fue convocada una reunión en el Ministerio de Instrucción Pública a la que se invitó a todas las facultades a enviar un representante. La facultad de Derecho fue autorizada por el ministro a enviar dos representantes. Debían acudir allí sin mandato representativo, aunque podrían aportar dos mociones —de los Sres. Castillejo y Gascón y Marín⁶⁸—, cuyo criterio podría ser asumido por la facultad de Derecho⁶⁹.

⁶⁶ M.^a F. Mancebo, *La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939)* cit., pp. 112 y 113.

⁶⁷ «El ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, aspiraba a redondear su mandato con una obra de más valor que lamentablemente quedó incumplida. [...] En 1933 De los Ríos envió a la palestra informativa un nuevo Proyecto de Ley de Bases, esta vez de la enseñanza universitaria, que recogía las experiencias ya citadas de la Universidad madrileña, así como los acuerdos de diversos claustros reunidos con este fin. Parecía que, finalmente, la Ley de Instrucción Pública, tan anunciada y prometida de abril de 1931, iba a ser realidad. Pero los embates políticos de que estaba siendo objeto el Gobierno no le permitieron acabar su obra. Un largo periodo de crisis, con relevos sucesivos en la Cartera de Instrucción Pública, acabó con las intenciones de mayor alcance previstas para la enseñanza española». A. Molero Pintado, «La segunda República española y la enseñanza (Primer Bienio)», en *Revista de Educación*, 240 (1975), p. 59.

⁶⁸ Sobre la figura de Gascón y Marín, vid. «Gascón y Marín y el Derecho», *Revista Nacional de Educación*, 53 (1945), pp. 69-70.

⁶⁹ «Se entra en discusión sobre las mociones de los Sres. Castillejo y Gascón sobre reforma de la enseñanza universitaria. El Sr. Decano propo-

Pero sin duda, un tema debatido y que fue particularmente controvertido fue el deseo de implantar un examen de ingreso en la Universidad, lo que se conoce también con el nombre de 'examen de selectividad'.

Por una orden con fecha de 7 de noviembre de 1934 se organizó una prueba de capacidad para el ingreso de los alumnos en las facultades universitarias. Se trataba de un examen de ingreso para tener acceso a la Universidad en general y no un examen en cada facultad. Estaba previsto que esta prueba se verificara dos veces al año, en enero y en septiembre, ante un tribunal constituido por catedráticos de Ciencias y de Filosofía y Letras. Estos tribunales se formarían en cada Universidad, en el número que el Rectorado considerase conveniente. Excepcionalmente, en el curso 1934-1935 los exámenes se verificarían en los meses de mayo y septiembre.

Según la normativa prevista sobre este examen de ingreso, un alumno que fuera reprobado cuatro veces perdería el derecho a ingresar en la Universidad. Y la aprobación del examen de ingreso sólo surtiría efecto para la Universidad donde se hubiera verificado⁷⁰.

Este decreto fue aclarado en una orden posterior de fecha 24 de noviembre en la que se añadía a las excepciones de la prueba de ingreso a los que tuvieran aprobada alguna asignatura en cualquier facultad. Estos alumnos «se encuentran exceptuados del examen de ingreso en la Universidad y, por lo tanto, en cualquier Facultad, a no ser que éstas tengan régimen de ingreso especial al que necesariamente tienen que someterse los alumnos»⁷¹, régimen especial que, por cierto, no existía en la de Derecho.

ne que estas mociones, que no se contradicen sino que se completan, sean llevadas como criterio de la Junta a la reunión convocada para el día veinte en la Universidad. Claro es que no como mandato imperativo a nuestros representantes sino como criterio que les sirva de inspiración. Así se acuerda. También advierte el Sr. Decano que según le manifestó el Sr. Ministro en la entrevista señalada, no hay ningún inconveniente para que la Facultad nombre dos representantes en vez de uno solo del que habla la orden-convocatoria. Se nombran como delegados de la Facultad a los señores Gascón y Marín y Recaséns Siches», *Actas Junta de Facultad de 17 de junio de 1932*, folio 322.

⁷⁰ Decreto de 7 de noviembre de 1934 (Gaceta de 9 de noviembre). El decreto añade otras reglas adicionales.

⁷¹ Orden de 24 de noviembre de 1934 (Gaceta del 30 de noviembre).

Una nueva rectificación del decreto de 7 de noviembre aparecía por orden del 6 de diciembre. En ella se disponía que los exámenes de ingreso para 1935 se adelantasen al mes de febrero de ese año. Otras órdenes adicionales sobre este examen fueron las de 6 y 10 de diciembre de 1934⁷²; el decreto de 30 de enero de 1935 por el que se exceptuaba también del examen de ingreso a los que poseyeran un título profesional y a los alumnos libres⁷³; y la orden de 28 de enero del mismo año por la que se disponía «que la edad que debe tener el alumno al formalizar la matrícula sea la de quince años cumplidos»⁷⁴.

Sin embargo, la continua sucesión de normas sobre este examen de acceso a la Universidad y, evidentemente, la falta de previsión inicial, llevó a una cascada de rectificaciones y precisiones, que obligaron a aprobar con fecha 23 de abril de 1935 un decreto que refundía todas las disposiciones vigentes sobre este examen: se celebraría en marzo y septiembre, y se confirma que sólo sería válido para la Universidad en que se verificara el examen⁷⁵. Las precisiones y acla-

⁷² Órdenes de 6 de diciembre de 1934 (Gaceta de 17 de diciembre) y Orden de 10 de diciembre de 1934 (Gaceta de 12 de diciembre).

⁷³ Decreto de 23 de abril de 1935 (Gaceta de 24 de abril).

⁷⁴ Orden de 28 de enero de 1935 (Gaceta de 30 de enero). Esta orden es a su vez aclarada por otra orden posterior de 21 de agosto de 1935. En ella se resuelve «que se entienda aclarado el mencionado artículo (artículo 7 del decreto de 23 de abril) en el sentido de que a todo alumno que cumpla los quince años antes del 30 del próximo mes de septiembre se le admita la matrícula para efectuar el ingreso en las Universidades» (Orden de 21 de agosto de 1935, Gaceta de 22 de agosto). También otra orden posterior de 28 de septiembre se exceptúa de esta regla a «los alumnos que, habiendo obtenido premio extraordinario en los exámenes de ingreso en la Universidad, cumplan los dieciséis años después del 30 de septiembre y antes del 31 de mayo». Establece que les sea admitida la matrícula oficial ordinaria en la Facultad en que vayan a cursar sus estudios. Para el resto de los alumnos no se admitirá la matrícula oficial si no han cumplido los dieciséis años de edad (orden de 28 de septiembre de 1935, Gaceta de 30 de septiembre).

⁷⁵ Decreto de 30 de enero de 1935 (Gaceta de 1 de febrero). Este decreto fue complementado con una orden de 23 de abril en la que se dictaban disposiciones para la ejecución de aquel decreto (Orden de 25 de abril de 1935, Gaceta de 26 de abril); y por otra de 1 de julio de 1935, que disponía que en el mes de agosto se admitieran matrículas condicionales para asignaturas del primer año conjuntamente con la de ingreso (Orden de 1 de julio de 1935, Gaceta de 8 de julio).

raciones se sucedieron hasta bien entrado el tumultuoso curso 1935-1936, en el que comenzaría la Guerra Civil⁷⁶.

7. *Epílogo: el estallido de la Guerra Civil*

Las actas conservadas de la facultad de Derecho acaban en junio de 1934. A partir de esa fecha se inicia un nuevo volumen de actas que no ha llegado hasta nosotros. Por tanto, carecemos de datos de los acuerdos de la Junta a partir de septiembre de 1934.

Aunque las fuentes de la facultad callen sobre lo que ocurrió en aquellos últimos meses antes de la Guerra Civil, la Universidad continuó con su actividad, y no se vio paralizada ni la labor legislativa de las Cortes, ni tampoco la labor del Gobierno ni de los ministerios. De hecho, incluso tras el comienzo de la guerra, tuvo nueva vida la actividad normativa del Ministerio de Instrucción Pública y, muy particularmente, en lo relativo a la cuestión de los planes de estudio.⁷⁷

El 8 de octubre de 1936 el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública remitió un telegrama a todas las facultades de Derecho de España en el que pedía nuevos informes para organizar las enseñanzas de las universidades. También se ordenaba que fueran reunidas las Juntas de Facultad de todas las Universidades situadas en ciudades bajo dominio del Gobierno republicano y que propusiera al Ministerio de Instrucción Pública un plan de las enseñanzas o trabajos que pudieran realizar en relación con las necesidades de la lucha del pueblo español. En la comunicación también se intentaba realizar un control de los profesores que asistían a la reunión. Se pedía que los decanos diesen cuenta de los catedráticos y profesores que hubieran asistido y se incluyeran las razones que alegasen los no presentados para justificar su ausencia.

Pero, evidentemente, poco más se podía hacer en esos momentos. La guerra paralizó las universidades y muchos profesores abandonaron su actividad científica. Cuando comenzó el asedio de

⁷⁶ Cfr. Decreto de 8 de octubre de 1935 (Gaceta de 11 de octubre) y órdenes de 14 y 21 de octubre de 1935 (Gacetas de 18 y 25 de octubre).

⁷⁷ Vid. M. Fernanda Mancebo, *La Universidad de Valencia*, cit., pp. 145-149.

Madrid, también muchos de ellos se trasladaron a la nueva capital de la República, Valencia. Y los alumnos de la facultad debieron mayoritariamente incorporarse a filas y un buen número de ellos perderían la vida durante la guerra. De esta manera, la Universidad fue una víctima más de la Guerra Civil.

José M.^a Puyol Montero
Universidad Complutense

APÉNDICE

Informe de la Junta de Facultad de Derecho sobre la creación de una Facultad de Economía, *Actas de la Junta de Facultad de 15 de septiembre de 1931*, folios 246-252.

La Junta de Facultad de Derecho de la Universidad Central, honrada por la Superioridad con el encargo de informar acerca del anteproyecto de creación de una Facultad de Economía, ha acordado en primer término expresar su gratitud al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública por la señalada consideración de que la hace objeto con la expresada consulta.

Correspondiendo a ella y expresando su opinión con la sinceridad debida al Gobierno que la requiere y a la cultura nacional, no oculta sus dudas sobre la posible eficacia de la creación de una Facultad de Economía para el logro de los fines perseguidos según el preámbulo del decreto. Y si la disposición de la Superioridad impide inventar alternativas al sistema, la lealtad no permite a esta Junta silenciar su juicio en aspecto tan capital.

Con el debido respeto manifiesta también la Junta su dificultad para interpretar si el deseo expresado en el preámbulo antedicho es la formación de economistas, de hombres que conozcan sistemática y científicamente la materia económica, o de personas capacitadas para la gerencia de empresas. Los técnicos de la Banca, y en la economía rural, y en los transportes, y en la electrificación, y en la racionalización, y en las empresas municipales, y en la vivienda, y en la función de los Sindicatos en el Estado moderno, a que el preámbulo se refiere, pueden tener la una o la otra formación y tanto los unos como los otros, son necesarios al desenvolvimiento económico de las naciones.

Esta Junta podía plantearse el problema de incorporar ese doble criterio a la creación de una Facultad de Economía, pues aún cuando entiende que dicha mezcla de la preparación especulativa y propiamente científica con la técnico-práctica va en perjuicio de la eficiencia del sistema de enseñanza y no responde desde luego al espíritu de la Universidad europea creadora de la cultura moderna, existen, no obstante, instituciones que procuran atemperarla; pero contando España con las Escuelas Superiores Técnicas y con las de Comercio, considera esta Junta que es privativa de las mismas la

enseñanza de las diversas técnicas de la empresa, y que sería un error que la Universidad les disputara una función que le es menos adecuada. Y comprendería, asimismo, que siendo los más urgente la formación de dichos técnicos, el Estado procurase desarrollar y atender con especial interés sobre todo a las Escuelas de Comercio.

Supone, por tanto, esta Junta que la Facultad de Economía cuya creación se ha decretado, ha de tener por cometido la formación de economistas propiamente dichos, de científicos de la Economía. Desde este punto de vista, no puede menos de subrayar un escrúpulo fundamental y de principio. A juicio de esta Junta, el economista no puede producirse apropiadamente en una preparación espiritualmente instrumental o técnica sino que ha de tenerse en cuenta la conexión de lo económico con lo jurídico. La ciencia económica, desde que adquirió plenamente rango de tal, fue una ciencia de las llamadas morales, y la materia que la sirve de objeto no vive aislada de una serie de relaciones humanas autónomas, simples y específicas, sino en una serie de relaciones complejas y sustancialmente jurídicas. Y a medida que los tiempos avanzan y esas relaciones van convirtiéndose de privadas en públicas, su sentido jurídico se va destacando de una manera más concluyente y precisa.

Esta observación es uno de los argumentos que han llevado a la Junta informante a comenzar por salvar su opinión sobre la probable eficacia de la creación de una Facultad separada de Economía.

Hechos los reparos y aclaraciones que anteceden, considera esta Junta que los estudios de Economía en una Facultad a ellos expresamente dedicada, tal como ha sido concebida la disposición que se informa, debiera realizarse en cinco cursos y componerse de las siguientes enseñanzas:

Primer curso. Complemento de matemáticas (12 horas semanales. A estudiar en la Facultad de Ciencias). Conceptos fundamentales de Economía Política (6 horas semanales). Historia económica y social —primer curso—. Historia de las Edades Antigua y Media (6 horas semanales). Complemento de lengua francesa (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Segundo curso: Economía política general (6 horas semanales). Teoría general de la Estadística (3 horas semanales). Teoría general de la Hacienda (6 horas semanales). Historia Económica y Social, segundo curso (desde los descubrimientos geográficos hasta el maquinismo (6 horas semanales). Lengua inglesa —primer curso— (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Tercer curso: Historia económica y social —tercer curso— (desde la implantación del maquinismo hasta la Gran Guerra. 6 horas semanales). Política económica: agraria, industrial y comercial (6 horas semanales). Teoría especial de la imposición (3 horas semanales). Dinero y bancos (3 horas semanales). Estadística demográfica (3 horas semanales). Lengua inglesa —segundo curso— (a estudiar en la Escuela Central de Idiomas. 3 horas semanales).

Cuarto curso: Historia económica y social —cuarto curso— La guerra y la postguerra (6 horas semanales). Política social contemporánea (3 horas semanales. A estudiar en la Facultad de Derecho). Hacienda pública española, general y local (6 horas semanales). Nociones fundamentales de organización de la empresa privada y concentración de las empresas, con especial consideración de la llamada racionalización (6 horas semanales). Estadística administrativa (3 horas semanales). Lengua alemana —primer curso— (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas) o Complemento de lengua alemana (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Quinto curso: Problemas actuales de la organización económica del mundo, con especial consideración de los europeos (3 horas semanales). Cuestiones fundamentales actuales de la Economía pura (3 horas semanales). La coyuntura económica y los métodos de observación y prognosis (6 horas semanales). Hacienda pública de las grandes potencias (3 horas semanales). Estadística económica (3 horas semanales). Lengua alemana —segundo curso— (3 horas semanales. A estudiar en la Escuela Central de Idiomas).

Doctorado: El Doctorado no se estudiará en curso aparte. Consistirá en trabajos de Seminario que organizará la Facultad y podrán ser cursados dentro del periodo de Licenciatura.

Profesorado: Para desempeñar las correspondientes Cátedras habría que contar dentro de la Facultad con cuatro economistas, dos especialistas en Historia económica y social y dos estadísticos. Y para la provisión de dichas Cátedras debiera seguirse, a juicio de esta Junta, el procedimiento legal vigente para la provisión de Cátedras de nueva creación, es decir, la oposición libre entre aspirantes que tengan título de Doctor en la Facultad o título de Escuela Superior Técnica. Esa norma ha de ser aplicable a la selección del profesorado nacional, quedando la Facultad autorizada para contratar libremente la colaboración del personal docente extranjero.

El programa bosquejado es una mera distribución de enseñanzas y no implica incompatibilidades de estudio entre ellas, fuera de las que lógicamente deben reconocerse.

Por otra parte, se trata del cuadro de estudios mínimos y ha de ser complementado por cursos especiales. Por ejemplo, la política monetaria actual de España, la agraria, la ferroviaria, la de la energía hidroeléctrica, etc. La naturaleza de dichos cursos supone: primero, que han de seguirlos únicamente los alumnos a quienes les interese; segundo, que deben ser circunstanciales y quedar fuera del cuadro básico de asignaturas para poder hacer los cambios que se entienda procedentes; tercero, que no debe encargarse su explicación a un profesorado permanente.

En consecuencia, la Facultad debiera quedar autorizada para organizar, con la previa aprobación del Gobierno, cursos complementarios, así como para encargar de la enseñanza de los mismos a personas especialmente competentes.